

—en los distintos niveles— llegaron para quedarse, la respuesta es que sí; pero han disminuido las expectativas sociales acerca de su eficacia y su capacidad real para resolver problemas. Hay varias razones:

Las alternancias han reeditado deformaciones de prácticas políticas y administrativas que durante años les sirvieron de bandera de lucha cuando eran oposición. El nepotismo es el mejor ejemplo.

La petrificación de los mismos de siempre en los cargos municipales y en los congresos, otro ejemplo, por el veto que ha significado para la participación de las nuevas generaciones, algo que no sucedió en los gobiernos que promovieron la movilidad.

Muchas autoridades municipales han considerado que sus parientes son los mejores aliados para gobernar en equipo, y así lo han fomentado. Por eso ha sido muy común observar administraciones públicas abarrotadas con parientes, sin ningún recato ni prurito, y exhibiendo enormes debilidades de las autoridades municipales que ofrecieron un cambio. Tampoco las alternancias se han caracterizado por disminuir la corrupción en el manejo de los asuntos públicos. Por el contrario, la corrupción se ha disparado, y los propios familiares de las autoridades municipales han sido señalados en desvíos de recursos dentro de las áreas administrativas en materia de compras y pseudo licitaciones. También en las designaciones de personal o de las plazas hereditarias en diversos niveles, como lo demuestran los casos de Zacatecas y Guerrero; los casos más emblemáticos de retroceso —político caciquil— y los más representativos del verdadero cambio prometido por las alternancias.

Antes eran los caciques y los grupos de poder los dominantes a los que había que combatir. Ahora—y en muchos casos— son los que económicamente



sostienen a los partidos los que deciden. El otro problema en las alternancias es el de la cooptación de las autoridades municipales y las policiacas por parte de la delincuencia organizada: ¿Cuánto del territorio nacional ha sido copado por la delincuencia organizada y cuántos de los 2,412 municipios

de México operan condicionados e infiltrados por dichas fuerzas? Hay elementos, como el asesinato frecuente de candidatos a las alcaldías, que revelan que algo anda mal es esos municipios y estados. También está la queja recurrente de productores, transportistas y empresarios de algunas entidades como Michoacán, Estado

de México y Guerrero, acerca del cobro de piso y extorsiones exigidas para que circulen sus mercancías, y esa crisis, en lugar de amainar se ha recrudecido.

Ya algunos gobernadores irresponsable y cínicamente han dicho que “Son cosas que pasan” o señalan que los candidatos “no deben comprometerse con grupos delincuenciales por los riesgos que asumen”. Pero los asesinatos de candidatos —municipales— de los diversos partidos siguen y se intensifican en tiempos electorales, donde no se descarta que algunos de ellos estén realmente comprometidos con otras fuerzas y no necesariamente con sus partidos políticos.

¿Culpa de las alternancias políticas?, o ¿falla del sistema de seguridad pública que no le ha encontrado la cuadratura al círculo de la permanente tensión entre las libertades ciudadanas y el constante condicionamiento de los poderes de facto que se imponen al Estado y a sus autoridades?

En México no se ha querido reconocer el fenómeno en su impacto regional y geográfico, a pesar de que las autoridades estadounidenses hablan de un 30% del territorio nacional copado por la delincuencia.

La sociedad y los votantes en México esperan definiciones y respuestas, de cara a la elección del próximo 2 de junio, acerca del problema más acuciante que enfrentamos los mexicanos —desde 1917— (más que otras crisis que creíamos más graves)... La seguridad que ya está en la agenda de las campañas como la principal preocupación.

*** Presidente de la Fundación Colosio. Correo: bulmarop@gmail.com**